

Miércoles 2 de julio de 2008.

Energía: el precio de la imprudencia

Por Francisco A Mezzadri
Para LA NACION

La proximidad del invierno ha provocado diversas notas periodísticas acerca de la disponibilidad de energía y del precio de los combustibles. La visión integral del problema indica que, a pesar de la inversión actual en nueva capacidad de generación, el sistema seguirá en déficit, dificultad agravada por una oferta de gas natural nacional estancada y una creciente necesidad de utilizar combustibles importados para la generación, a costos muy superiores a los vigentes en el sistema argentino.

Forman parte no menos importante de esta visión la caída en un 20 por ciento de la productividad energética, la ausencia de políticas efectivas de ahorro de energía, la necesidad de corregir la fuerte distorsión de precios internos y el hecho de que el cuadro energético de la próxima década es un dato desconocido para cualquier inversor y para la dirigencia política argentina en general.

El Estado subsidia la energía eléctrica, por ahora, como si no tuviera restricción presupuestaria alguna, tratando de aislar los precios internos de los internacionales. Pero a medida que la diferencia entre unos y otros se agranda y los volúmenes de combustibles importados aumentan con fuerza, aquel aislamiento encuentra sus límites ácidos, uno de los cuales es el creciente endeudamiento del Estado con los generadores.

Un caso extremo, mirando al futuro, son los compromisos financieros que finalmente asuma el Estado por la importación de combustibles líquidos y gas licuado para las nuevas plantas de generación que se instalarán este año y el que viene. El volumen de esos combustibles importados que ellas demandarán crecerá sustancialmente en el trienio hasta 2010 y costarían al país aproximadamente 9600 millones de dólares, a los precios actuales.

Si Bolivia hubiera cumplido su contrato con la Argentina, el país, sólo en este caso de las nuevas plantas, hubiera ahorrado casi 6000 millones de dólares. Hace a la transparencia de estos importantes acuerdos saber si la Argentina ejercerá sus derechos resarcitorios por incumplimiento de contrato.

Este año, el de menos gastos del trienio, el conjunto de los costos de combustibles importados para las nuevas plantas de generación será de 960 millones de dólares. La situación para los dos años siguientes puede ser peor, porque sólo el costo para importar gas de Bolivia, gas natural licuado y gasoil para las mismas plantas alcanzaría valores próximos a los 3600 y 5100 millones de dólares, respectivamente, en la medida en que se concluya su construcción y estén en plena operación.

En realidad, la política oficial agudizó la crisis de combustibles existente, al instalar, bajo iniciativa pública, unidades generadoras que utilizan gas natural o gasoil en cantidades que el país no está en condiciones de abastecer, en el corto o en el mediano

plazo, en lugar de haber incentivado desde hace seis años un decidido plan de inversiones privadas hidroeléctricas y de generación a carbón o eólica.

Obviamente, igual propuesta de incentivos era extensiva a la exploración de hidrocarburos.

La planificación energética está tan ausente de la realidad que si, por ejemplo, las nuevas plantas térmicas por inaugurar este año y el que viene utilizaran sólo gas natural, ellas consumirían el 85 por ciento de la capacidad programada para importar por el gasoducto que Enarsa construye desde Bolivia. Aunque Bolivia hubiera cumplido, los 27 millones de metros cúbicos por día contratados resultarían una meta de largo plazo, ya insuficiente para la Argentina de 2006, cuando se firmó el contrato.

Pero desde ese país no llegará el gas, y de su ausencia surge la más costosa dependencia externa del fueloil, del gasoil, del gas natural licuado y de la energía brasileña.

La Argentina no tendrá, por lo menos a mediano plazo, combustibles nacionales para sustituirlos, excepto el gas adicional que pueda surgir, si se establece un marco institucional adecuado y confiable para las nuevas inversiones.

Como consecuencia, el velo de los subsidios públicos y privados (o implícitos) a distintos tipos de usuarios, otorgado por vía de la oferta, perdería mayor respaldo financiero. Hoy, el suministro de energía a usuarios residenciales cuesta menos de un tercio del costo medio sancionado por el Gobierno, pero ese costo medio refleja, a su vez, el costo del gas nacional como combustible, cuyo precio de referencia equivale al 20 por ciento del gas importado desde Bolivia, o al 10 por ciento del gas licuado importado que se gasifica en Bahía Blanca, o al 6,5 por ciento del costo del gasoil.

Tal es la amplitud de las distorsiones de precios en el país, tal es el grado de su inconsistencia económica y tal es la magnitud del problema económico, social y político que han florecido como resultado de la política energética.

¿Cuánto costaría la energía eléctrica en la Argentina sin subsidios de ninguna especie? Es posible estimar que los costos de generar energía térmica en equipos nuevos sería de entre 100 y 210 dólares el megawatt-hora, dependiendo de los combustibles que se utilicen, en tanto que el precio medio en el mercado eléctrico mayorista es hoy de 32 dólares.

En rangos de precios algo superiores a los 100 dólares, ya serían factibles los proyectos hidráulicos, eólicos y nucleares en nuestro país. Para ilustrar relativamente estos costos, conviene tener en cuenta que las plantas habilitadas para exportar energía y que utilizan gasoil en Brasil declaran precios promedio de exportación de 451 dólares, aunque internamente su precio es de 255 dólares por megawatt-hora.

Recomponer el sistema de precios en nuestro país es un proceso inevitable, para el cual se pueden concebir diferentes alternativas técnicas, pero la mayor dificultad política residirá en comprender que los subsidios -que, efectivamente, se necesitarán hacia adelante- no deberán ser para quemar gas natural o gasoil como resultado de una política equivocada, sino para iniciar al país en la incorporación decidida de modernas

tecnologías de generación que alejen nuestra matriz energética de su alta dependencia de los hidrocarburos.

Finalmente, el cuadro financiero de la energía y su mayor dependencia energética externa constituyen un factor de creciente efecto negativo sobre los superávits gemelos, fiscal y comercial.

La balanza comercial sectorial se redujo un 33 por ciento en 2007, después de registrar un superávit de 6000 millones en 2006, y resultará negativa a corto plazo. No sería sorprendente que el país perdiera no menos de 9000 millones de dólares de sus saldos externos en sólo tres años.

Desde la visión fiscal, cuánto del costo total en combustibles será pagado por la demanda y cuánto por el Estado sólo puede estimarse en función de las pautas actuales. Si ellas no se modificaran, el Estado podría necesitar financiar unos 4000 millones de dólares este año, sumando su proporcional en la importación de combustibles para las nuevas plantas de generación y las ya existentes más el costo de la energía que se compra a Brasil, más el subsidio identificable a la energía de uso residencial.

Aquella cifra será superior en 2009 y 2010. En consecuencia, este año la presión fiscal por la mera compra de combustibles será también muy superior a la observada en 2007, quizá cercana al 1,4 por ciento del PBI. Si el cuadro actual de precios se mantuviera, si las condiciones de dependencia externa no se alteraran y si la política de subsidios no se modificara, las cifras resultantes serían fiscalmente intolerables en 2009 y 2010.

Ni el deseable crecimiento de las exportaciones argentinas justificaría sostener la continuidad de tamaño derroche de recursos, al costo de desfinanciar las múltiples dimensiones de la distribución del ingreso, de frenar el crecimiento del empleo y de continuar debilitando gravemente la seguridad energética del país.

© LA NACION

El autor es economista.